

“Con los pies en el territorio”.

Organizaciones sociales y hábitat en tiempos de pandemia.

Paula Cecilia Rosa -*paula_rosa00@yahoo.com.ar*

Centro de Estudios Urbanos y Regionales CEUR-CONICET

María de la Paz Toscani -*mariadelapaztoscani@gmail.com*

Centro de Estudios Urbanos y Regionales CEUR-CONICET

Recibido: 16-09-2022

Aprobado: 11-11-2022

Resumen: En Argentina a poco de ser declarada la pandemia, el gobierno nacional puso en marcha un conjunto de medidas de significativo impacto social y económico. Entre las más destacadas encontramos la restricción de la circulación y el aislamiento preventivo y obligatorio. Esto implicó la confinación de gran parte de la población a vivir de manera permanente en sus viviendas. Esta situación generó una serie de complicaciones principalmente para las familias que percibían ingresos informales y vivían en condiciones habitacionales deficitarias. En esta coyuntura compleja, las organizaciones sociales cobraron centralidad, especialmente, las comunitarias y barriales dado que fueron un sustancial soporte frente a la crisis socio-sanitaria. En este artículo se pretende analizar el rol asumido por las organizaciones sociales del campo del hábitat popular durante la pandemia, identificándolas como actores claves para el acompañamiento y sostén de la población que habita en territorios marcados por la alta vulnerabilidad social. Lo presentado, surge de los datos relevados por la iniciativa colaborativa Territorios en Acción, la cual se origina en tiempos de pandemia, para recabar información sobre el accionar de las organizaciones sociales de nuestro país. Sumado a los datos agregados, se realizaron entrevistas a cinco referentes de organizaciones de gran relevancia en el campo del hábitat.

Palabras clave: organizaciones sociales; hábitat; pandemia; entramado participativo; estrategias.

Abstract: In Argentina, shortly after the pandemic was declared, the national government launched a set of measures with a significant social and economic impact. Among the most outstanding we find the restriction of circulation and the preventive and obligatory isolation. This implies the confinement of a large part of the population to live permanently in their lives. This situation generates a series of complications mainly for the families that perceive informal income and live in deficient housing conditions. In this complex situation, social organizations gained centrality, especially community and neighborhood organizations, since they were a substantial support in the face of the socio-sanitary crisis. This article aims to analyze the role assumed by social organizations in the field of popular habitat during the pandemic, identifying them as key actors for the accompaniment and support of the population that lives in territories marked by high social vulnerability. What is presented arises from the data collected by the collaborative initiative Territories in Action, which originated in times of pandemic, to collect information on the actions of social organizations in our country. In addition to the aggregated data, interviews were conducted with five representatives of highly relevant organizations in the field of habitat.

Key words: social organizations; habitat; pandemic; participatory network; strategies.

Introducción

El acceso a la vivienda constituye una problemática recurrente en la República Argentina. Desde hace décadas se instrumentan diferentes políticas y programas para atender esta necesidad, aunque el déficit habitacional en términos cualitativos y cuantitativos representa un fenómeno creciente y persistente¹. En este contexto, amplios sectores de la población habitan en viviendas con condiciones deficitarias² (hacinamiento, insalubridad, problemas sanitarios, etc.) y se ven imposibilitados por sus propios medios para mejorar su calidad de vida. Por ello, el acceso a un hábitat de calidad en Argentina representa un proceso

¹ En Argentina, el déficit cualitativo implica cerca de 60% del parque habitacional deficitario total, dato perdurable a lo largo de las últimas décadas. Asimismo, las políticas públicas dirigidas a proveer de soluciones habitacionales al déficit cualitativo -reforzadas a partir de la implementación del Plan Federal de Vivienda en 2003- aún representan un porcentaje relativamente escaso en materia de inversión pública (Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2013).

² Según estimaciones de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación (desde marzo de 2018, Secretaría de Vivienda), en nuestro país el déficit habitacional es de 3,5 millones de viviendas. Entre las viviendas afectadas, 2,2 millones son viviendas deficitarias, 1,1 millones son de hacinamiento semi-crítico y 0,2 de hacinamiento crítico (Granero Realini, et al, 2018).

en el que amplios sectores de la población encuentran comprometidas sus posibilidades de lograr una vivienda y un entorno dignos (Rosa, et al, 2013).

Esta situación se vio agravada a partir de la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 11 de marzo del 2020. Ni bien empezada la pandemia, diferentes gobiernos comenzaron a implementar medidas de contingencia para evitar la propagación del virus (Ratto y Azerrrat, 2021). Una de las medidas más utilizadas fue el aislamiento generalizado de la población, a excepción de quienes desarrollaran tareas esenciales. El distanciamiento social y el predominio de las actividades virtuales, generaron fuertes cambios e impactos en la cotidianeidad de la mayor parte de la población mundial (Grisberg y Verón, 2022). En Argentina, a través del decreto 297/2020 se sancionó el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) que comenzó a regir a partir del 20 de marzo del 2020. Se trató de la primera medida que se impulsó fuertemente desde el estado nacional y que alcanzó amplia difusión a partir del #QuedateEnCasa. Para preservar a la población, la vivienda se convirtió en el lugar clave y central para “cuidarse” del contagio. Esta idea presupuso a la vivienda como un lugar de refugio y cuidado (Heidegger, 1951), y como espacio donde garantizar condiciones de salud y resguardo del contagio del virus.

Si bien esta medida fue inicialmente aceptada y acatada por la población, en poco tiempo quedó evidenciado que las viviendas y los entornos en los que habitamos, no siempre generan experiencias positivas en nuestro habitar, y que, por el contrario, diferentes condicionantes materiales y relacionales se transforman en limitantes y problemáticas que tornan dichas experiencias en “un habitar hostil o resignado a las animadversiones que ve en su vivienda y entorno” (Espinosa Ortiz, Vieyra y Garibay Orozco, 2015: 65). Enseguida “salieron a la luz” las problemáticas sociales y habitacionales que impedían que ciertos sectores pudieran cumplirla de manera eficiente. Se visibilizó que distintos factores de la propia vivienda, tanto físicos (escasa ventilación, falta de acceso al agua, hacinamiento, etc.) como vinculares (situaciones de violencia hacia las infancias, de violencia de género), tornaban imposible el mantenerse en aislamiento en los hogares. Sumado a lo anterior, la falta de agua en las viviendas, las restricciones económicas para acceder a elementos de higiene y limpieza, la falta de ingresos para comprar alimentos y el escaso o nulo acceso a la conectividad complejizaron aún más la situación. Estas cuestiones generaron una revisión generalizada sobre en qué circunstancias habitan grandes sectores de la población.

La cuestión sanitaria y la crisis económica dejaron en evidencia problemas estructurales dando cuenta de la vulnerabilidad extrema en la que se encuentran determinados sectores a quienes la pandemia les impactó fuertemente en términos, no solo de salud, sino también económicos, sociales, habitacionales, etc. Esta coyuntura llevó a una situación sumamente crítica desde el punto de vista económico y financiero, que aceleró e intensificó las desigualdades territoriales, de género y de clase preexistentes (Fournier y Cascardo, 2022).

En este escenario, confuso, restrictivo y desigual, dada su trayectoria y su cercanía con las problemáticas habitacionales y su conocimiento de las tramas en los territorios es que las organizaciones sociales vinculadas al campo del hábitat³ cobraron gran relevancia acompañando a la comunidad en general y a las poblaciones más vulnerables como lxs ancianxs, lxs niñxs, las personas con discapacidad y las mujeres, en particular. Desde diferentes ámbitos, se reconoce que fueron las organizaciones sociales barriales y comunitarias las que se constituyeron en un sostén cotidiano para la población y, además, fueron quienes ocuparon un rol clave como articuladores entre las políticas y medidas económicas, sociales y sanitarias impulsadas por el Estado y la población.

Este artículo posa la mirada en este actor con la intención de presentar información reciente y actualizada sobre el accionar de las organizaciones sociales del campo del hábitat popular durante la pandemia, entendiendo el lugar estratégico que tienen en el territorio a partir de su vinculación directa con la población que se encuentra en situaciones sociales y habitacionales de alta vulnerabilidad. Principalmente, el interés está puesto en recuperar sus experiencias para dar cuenta del rol que han asumido en los territorios para amortiguar los efectos generados en este contexto.

La elaboración del artículo se basa en información surgida a partir de un cuestionario autoadministrado entregado a un conjunto de organizaciones sociales en el marco del proyecto colaborativo *Territorios en Acción* durante los años 2020 y 2021. Esta iniciativa, desarrollada de manera conjunta por el centro de investigación CEUR/CONICET, el

³ Al hacer referencia al campo del hábitat remitimos a una mirada amplia con respecto a los lugares en los que vivimos y a los modos en los cuales habitamos. Ello implica, el tipo de vivienda, la calidad de esta, los servicios a los que se accede, pero también se incorporan las características del territorio, sus condiciones ambientales, las relaciones que se entablan con otrxs y con el entorno. Considerar al hábitat desde su complejidad implica una mirada dinámica y multidimensional que incorpora cuestiones materiales como también simbólicas y sociales condicionadas por un espacio y por un momento histórico particular (Rosa, 2015). En tal sentido, “el hábitat es una confluencia de lo tangible y de lo intangible en un sinfín de idas y vueltas” (Rosa, 2015: 255).

Observatorio del Conurbano de la UNGS y FLACSO-Argentina, tiene por objetivo generar conocimiento sobre el accionar de las organizaciones sociales vinculadas a diferentes campos de acción -economía social, hábitat, cuidado, género, salud-, de todo el país tanto en el período de pandemia como en la actualidad. Desde el lanzamiento de la iniciativa más de 2600 organizaciones forman parte de la base de datos y del mapa interactivo⁴.

Asimismo, el artículo se fundamenta en la información proveniente de entrevistas semi-estructuradas a una selección de relevantes organizaciones sociales del campo del hábitat popular, para conocer sus visiones y experiencias en cuanto a las acciones generadas durante la pandemia y los desafíos que encontraron durante este periodo. Tomando de referencia la base de datos de *Territorios en Acción*, se han seleccionado cinco organizaciones para la realización de entrevistas. Ellas son: Consejerías de Vivienda⁵, Abrigar Derechos⁶, Asociación Civil Madre Tierra⁷, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia⁸ y Arquitectxs de la

⁴ El proyecto consiste, principalmente, en el desarrollo de una plataforma de construcción colaborativa de conocimiento que da cuenta de las iniciativas que las organizaciones sociales realizaron frente a la emergencia social a nivel nacional a causa de la pandemia. Se apoya sobre una estrategia de mapeo colaborativo, donde la información básica es aportada de manera voluntaria por las propias organizaciones sociales a través de la respuesta a un cuestionario web autoadministrado. El cuestionario se encuentra confeccionado en el formato Google forms y está alojado en la página web de la iniciativa. Asimismo, para aumentar su alcance es distribuido por mail, por redes sociales y a contactos de WhatsApp. Por esta misma razón, la carga de información se realiza de manera permanente y en función de la distribución del formulario. Su carga y actualización es constante en función del ingreso de nuevas respuestas. Como el universo completo de organizaciones sociales que cuenta nuestro país no es conocido en la actualidad, la definición que se adoptó de organización social es amplia, por ello, no se realiza una selección o recorte previo desde ninguna dimensión específica, ni teórica ni empírica, sino que se pretende registrar la diversidad de entidades existentes en el país. El cuestionario está conformado por grandes bloques: datos de la organización y para su geolocalización, campo de acción, tipo de organización y relación con el Estado. El cuestionario completo se puede obtener en este link: <http://xn--territoriosenaccion-61b.org/pdf/Cuestionario-2022.pdf>. Asimismo, la información se presenta a través de una cartografía interactiva, que detalla la acción y las vías de contacto con cada organización, así como en bases con la información completa. La elaboración del mapa se apoya en una metodología colaborativa, sustentada en el principio de que la generación de conocimiento se realiza a partir del involucramiento y participación de los actores sociales, en este caso, las organizaciones sociales. Territorio en Acción, surge en tiempos de pandemia, con el fin de aportar al vacío de conocimiento que genera no conocer el universo de organizaciones sociales que posee nuestro país de manera agregada y actualizada. Los datos son de acceso libre y gratuito a través del sitio web del proyecto <http://territoriosenaccion.org/>.

⁵ Es una organización que lucha por el derecho a la vivienda digna. Surge en 2017 transitando distintos espacios colectivos y finalmente en 2019 se consolidan como organización de base. Acompañan principalmente a personas inquilinas informales dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Está integrada por un equipo interdisciplinario y personas inquilinas del sector informal de hoteles-pensión, inquilinatos y villas de la ciudad.

⁶ Es una organización no gubernamental, apartidaria y sin fines de lucro, que tiene por objetivo contribuir con la difusión, promoción de prácticas tendientes a garantizar el acceso de las personas en situación de vulnerabilidad socio-económica a derechos básicos y elementales para su desarrollo. Conformada por un equipo interdisciplinario que específicamente trabajan con personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle en CABA

⁷ Son una organización sin fines de lucro que surge en 1985 y actualmente trabaja en diferentes municipios del conurbano bonaerense (Derqui, Moreno, Merlo, Ituzaingó, Hurlingham, Morón, Pilar, José C. Paz y La Matanza) por el derecho a la tierra, la vivienda y un hábitat adecuado. Está integrada por un equipo interdisciplinario conformado por 22 profesionales especializados en producción de suelo urbano, mejoramiento del hábitat, desarrollo de metodologías participativas, hábitat y género, infancias, fortalecimiento de organizaciones, comunicación popular e incidencia en políticas públicas

⁸ Es una organización a partidaria, sin fines de lucro, que desde el año 2002 trabaja por la defensa de los derechos de los grupos más desfavorecidos de la sociedad. Su sede central está ubicada en el barrio de Monserrat, CABA y tienen dos dependencias en las provincias de Salta y Córdoba. El área del Derecho a la ciudad, se vincula específicamente con cuestiones de hábitat. Desde la misma se promueve el acceso igualitario a la vivienda y al hábitat urbano, y el ejercicio efectivo e integral de derechos, a través del involucramiento y la participación activa de la ciudadanía

comunidad La Plata⁹. Como criterio de selección se priorizó que sus áreas de intervención permitan representar la heterogeneidad de las formas de habitar dentro de las ciudades, tanto en lo que respecta a los ámbitos en el que se insertan, lo que esquemáticamente se plantea como ciudad consolidada y barrios populares -villas y asentamientos- y a su vez, en lo que refiere al tipo de vivienda -piezas en inquilinato, hoteles-pensión, conventillos, la calle, vivienda autoconstruida, etc.- como la forma de tenencia -alquilada o propia-. Estas dan cuenta, a su vez, de las desigualdades que hay en el acceso a la vivienda y de las distintas estrategias que los sectores populares despliegan para poder vivir en la ciudad.

El artículo se estructura en tres apartados. En el primero, se realizan aproximaciones teóricas al marco general planteado en el artículo; en segundo lugar, se analiza la información generada por el cuestionario auto administrado a un conjunto de organizaciones sociales del campo del hábitat y se incorpora el análisis a lo relevado a través de entrevistas a referentes de organizaciones. Finalmente, a modo de cierre, se introducen las conclusiones finales para contribuir con el debate sobre el rol que adquirieron las organizaciones sociales en el territorio y en la articulación entre población vulnerable y las políticas públicas.

La participación de las organizaciones del hábitat

Numerosos trabajos académicos producidos en el contexto latinoamericano desde mediados del siglo XX (Cuenya, *et al.* 1979; Turner 1977; Turner y Fichter 1976; Pradilla 1983 y 1987; Romero, 1995; entre otros) dan cuenta de que la participación de las organizaciones sociales resulta significativa para el tratamiento adecuado de la problemática habitacional que afecta a miles de familias y personas. La imbricación de las organizaciones sociales de hábitat en materia de vivienda social y asistencia en articulación con el Estado ha recorrido vaivenes, usualmente dependientes del rol del Estado, los financiamientos disponibles y los procesos de democratización de la vida institucional del país (Rosa, *et al.*, 2013), pero resulta central para dar sostén a miles de personas y afrontar coyunturas complejas como quedó demostrado en el periodo de pandemia.

En este punto, es importante señalar el rol preponderante que han tenido las organizaciones sociales en el campo del hábitat a partir de la vinculación/articulación con programas sociales. Los primeros antecedentes de programas destinados al mejoramiento

⁹ Son un colectivo conformado por estudiantes y graduados de la Facultad de Arquitectura de La Plata, Buenos Aires. Desde el año 2012 trabajan en barrios populares de la ciudad y sus alrededores, aportando su saber técnico y trabajando, en conjunto con organizaciones barriales.

del hábitat se sitúan a partir de la década del 1980, cuando se comenzaron a implementar incipientes medidas destinadas a mejorar las condiciones habitacionales de la población que se encontraba en asentamientos informales dentro de la ciudad (Motta, 2018). Posteriormente, desde mediados de la década de 1990, como señala Di Virgilio (2012), un importante número de organizaciones de diferentes tipos (ONG y/o de base territorial) se involucraron en la gestión del hábitat ya que se constituyeron en ámbitos a través de los cuales era posible acceder a los beneficios de ciertos programas. Estas experiencias iniciales se orientaban hacia la construcción de vivienda, el reordenamiento de villas, a la provisión de lotes con servicio, la construcción de redes de agua y cloacas, a la capacitación y el asesoramiento constructivo, a la regularización dominial, etcétera (Di Virgilio, 2012). Con el devenir del tiempo, y el fortalecimiento de las organizaciones sociales en este campo, se amplió su base de involucramiento, participación y articulación con las políticas estatales tanto a nivel nacional, provincial como local. Fueron estas las que, a través de sus intervenciones, incorporaron a las redes de acceso a recursos de los programas a las familias de menores ingresos (Di Virgilio, 2012). Además, fueron las que lograron tener mayor centralidad en los procesos autogestionarios vinculados a la producción social del hábitat. En este mismo camino, y a través de diversidad de demandas que buscaban trascender las propuestas estatales puntuales y sectorizadas, impulsaron, diseñaron y acompañaron la sanción de la Ley provincial 14.449 de Acceso Justo al Hábitat de la Provincia de Buenos Aires (Toscani y Rosa, 2022). Del mismo modo, fueron las organizaciones sociales del campo del hábitat las que participaron del diseño y ejecución del relevamiento de barrios populares, construyendo de manera nacional el Registro Nacional de Barrios Populares -RENABAP- que continúa en la actualidad. En el año 2016, el Estado Nacional, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, llevó a cabo por primera vez un relevamiento a nivel nacional de los barrios populares. Se realizó de manera conjunta con las organizaciones sociales nucleadas en la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), Cáritas, TECHO, la CCC (Corriente Clasista y Combativa) y Barrios de Pie. El trabajo se coordinó desde un equipo central con las organizaciones sociales mencionadas, todas ellas con anclaje territorial a lo largo del país. Un total de 4.416 barrios populares fueron identificados, caracterizados y georreferenciados. Esta iniciativa resultó de suma importancia para poner de relieve los problemas particulares de estos barrios y avanzar hacia propuestas diferenciadas en base a sus realidades específicas (Palumbo, et al. 2022). Asimismo, este

relevamiento allanó el camino para la definición del Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana. Tanto la Ley provincial como el Registro de Barrios Populares, cristalizan el rol central que en los últimos tiempos tuvieron las organizaciones sociales y su continuidad como actores claves en estos procesos (Toscani y Rosa 2022).

Esta trayectoria de las organizaciones del hábitat es parte de lo que permite comprender el conocimiento previo que tenían de los territorios en los cuales trabajaban y de las problemáticas sociales allí atravesadas. Esto resultó esencial para constituirse como rápidas *mediadoras* entre las políticas y medidas sociales y sanitarias gestadas en tiempos de la pandemia y las necesidades de la población. Como señalan Calabrese Tello et al (2015), las organizaciones por su inserción territorial son espacios determinantes para la articulación con la política pública. Ello se pudo observar en la implementación de diferentes programas sociales, en particular, los enfocados en sostener los ingresos y las condiciones de vida de los sectores más afectados por la declinación económica, que requirieron de la participación del entramado de organizaciones sociales localizadas en diferentes puntos del país.

Sumado a lo anterior, es importante introducir al análisis que el ser miembros de organizaciones sociales -o conformarlas- constituye una estrategia¹⁰ específica de los sectores populares que les ha permitido históricamente dar respuesta a sus necesidades, frente a la inacción estatal o la dificultad de satisfacerlas en el mercado. Asimismo, resulta una estrategia especialmente clave para sobrellevar momentos de crisis y encontrar algunas soluciones, aunque sean temporales, en esas coyunturas (Gradin, et. al 2021). El organizarse con otrx y participar en organizaciones sociales les permitiría potenciar sus posibilidades de acción. En este punto, Dabas y Perrone (1999) entienden a las organizaciones sociales como redes sociales pues se posicionan desde una concepción que comprende a la realidad en términos de relaciones, de pautas que conectan. En esta línea, para Dabas (1998), la red social, implicaría:

un proceso de construcción permanente tanto individual como colectivo. Es un sistema abierto, multicéntrico, que a través de un intercambio dinámico entre los integrantes de un colectivo (familia, equipo de trabajo, barrio, organización, tal como el hospital, la escuela, la asociación de profesionales, el centro comunitario, entre otros) y con integrantes de otros colectivos (1998:35).

¹⁰ La cuestión de las estrategias que emplean los sectores populares para satisfacer sus necesidades ha sido un significativo tema de estudio por parte de la academia latinoamericana a partir, especialmente, de las transformaciones políticas, económicas y sociales que se sucedieron con la instalación de políticas neoliberales en el continente (Argüello, 1981). Se han distinguido como más centrales las estrategias de supervivencia y estrategias domésticas (Hintze, 2004 y Najman, 2017).

Esto último posibilita, como señala la autora:

la potencialización de los recursos que poseen y la creación de alternativas novedosas para la resolución de problemas o la satisfacción de necesidades. Cada miembro del colectivo se enriquece a través de las múltiples relaciones que cada uno de los otros desarrolla, optimizando los aprendizajes al ser éstos socialmente compartidos (1998:35).

De este modo, es posible considerar que la participación en organizaciones sociales, permitiría tender un *punte* entre los condicionantes estructurales que operan en un nivel macrosocial y las posibilidades de acción que despliegan los sectores populares en un nivel micro. Por ello se considera que los procesos participativos se tornan un activo esencial para esta población. En este sentido, Pizzorno (1975) identifica a la participación desde su dimensión política y la define como “una acción que se cumple en solidaridad con otros, en el ámbito de un Estado o de una clase, con vistas a conservar o modificar la estructura (y por lo tanto los valores) del sistema de intereses dominantes” (1975:39). El autor señala que la participación política refiere a un tema de acción colectiva sobre la estructura de las desigualdades y en tanto tal, la propone como una acción generadora de áreas de igualdad. En la misma línea, Rosenfeld (2005) identifica que la participación social es una “práctica social política que se “produce” en un espacio de encuentro e intercambio entre actores en la esfera pública y ejerce algún tipo de incidencia en el contexto y en los sujetos” (2005:11). Pensar a la participación en organizaciones sociales como una *estrategia* para los sectores populares da cuenta de la importancia que esta tiene para poder hacer un “ejercicio” de la ciudadanía para el acceso a los derechos sociales que fueron vulnerados.

Desde el territorio: cifras y testimonios

En este apartado se presenta el análisis de la información cuantitativa¹¹ y cualitativa. Esta es presentada a partir de dos ejes: i) la labor cotidiana de las organizaciones del campo de hábitat, reconociendo sus líneas de acción tradicionales, identificadas como aquellas de acción directa en el territorio y otras vinculadas a monitoreo e incidencia en política pública;

¹¹ La información cuantitativa está basada en lo recogido del cuestionario auto administrado (conformado por preguntas cerradas y por preguntas abiertas) que fue completado por un total de 1515 en el momento en que fueron analizados los datos (mayo, 2022). De ese total, 32 fueron identificadas como organizaciones ligadas al campo del hábitat. Sobre esa cantidad fueron calculados los porcentajes que se presentan en este apartado. Cabe aclarar, que lo presentado no tiene intenciones de representatividad. Asimismo, la información obtenida por las preguntas abiertas fue tomada para la presentación de datos en este artículo. Más información sobre la metodología utilizada por *Territorios en Acción* se puede encontrar en el sitio web de la iniciativa colaborativa.

y ii) la estrategia que se propusieron frente a la irrupción de la pandemia que incluye diferentes acciones: acceso a recursos para la alimentación, mejoramiento de los espacios comunitarios, asesoramiento legal, acompañamiento para el acceso a los programas estatales y la incidencia en la política pública.

i) Labor cotidiana de las organizaciones del campo del hábitat

Para comprender los cambios ocurridos en este escenario, se indagó en las actividades e intervenciones previas a la llegada de la pandemia, con el fin de comprender mejor el campo de acción de las organizaciones sociales vinculadas al hábitat. Los resultados arrojados dieron cuenta de una heterogeneidad en el accionar de las organizaciones que se entiende a partir de la complejidad que suponen las cuestiones del hábitat en nuestro país.

A grandes rasgos, la mayoría de las organizaciones sociales realizan acciones que refieren a 1) la acción directa en los territorios y, en menor medida, 2) acciones vinculadas a cuestiones de monitoreo e incidencia en la política pública. Dentro de las primeras, se identifica una diversidad de acciones en sus quehaceres cotidianos vinculadas al acceso a la vivienda. Estas son muy heterogéneas también en función del territorio en el que trabajan y la población. Se pudieron identificar, por ejemplo, organizaciones que trabajan brindando asistencia técnica -desde el área de arquitectura y trabajo social- en los barrios para realizar mejoramientos en las viviendas. En ocasiones a través de la constitución de fondos rotativos de microcréditos o a partir del acceso a programas sociales que brindan subsidios para tal fin. Asimismo, hay acciones que van más allá de la vivienda y tienen que ver con intervenciones que promueven mejorar las condiciones del entorno barrial a través del arreglo de plazas y parques, construcción de espacios colectivos de recreación, la construcción o mejoramiento espacios comunitarios, intervenciones para mejorar el acceso a los servicios, el tratamiento y/o reciclado de residuos y distintas cuestiones relacionadas con el cuidado del medio ambiente. En este acompañamiento técnico se incluye también la formación en distintos oficios. También se destacan dentro de estas acciones aquellas donde las organizaciones sociales realizan asesoramiento legal, por ejemplo, en procesos de acceso a la tierra, de regularización dominial y/o relocalización de población de zonas de riesgo. Específicamente para población inquilina, este asesoramiento busca garantizar el cumplimiento de sus derechos en los contratos de alquiler y en el caso de alquiler informal de piezas, asesoramiento y acompañamiento para las situaciones de desalojos a las que se ven

expuestas. También, pero en menor cantidad, las organizaciones realizan acciones tendientes a la asistencia a grupos vulnerables en términos habitacionales como son las personas en situación de calle, brindando acompañamiento, viandas y asistencia en salud. En el segundo grupo de acciones, se destaca el monitoreo de distintas políticas habitacionales que incluye el pedido de información en organismos públicos, el apoyo en recursos de amparo en el caso en el que el Estado se encuentre incumpliendo las mismas (Toscani y Rosa, 2022).

De manera transversal en los diferentes tipos de acciones habituales, se destaca el interés por abordar la cuestión de género, el derecho de las infancias y la promoción de procesos participativos en los territorios. Para ello, también desarrollan una modalidad de trabajo interdisciplinario y en vinculación, a partir del fortalecimiento de redes, con organizaciones que trabajan en distintas escalas -barrial, municipal, provincial, nacional e internacional. De hecho, la participación en redes, es decir, donde confluyen y articulan con otras organizaciones sociales, es un aspecto característico dentro de la dinámica y el accionar de las organizaciones en términos generales. Ello se puede observar dado que el 54,9% de las organizaciones del hábitat refirieron tener participación en alguna red. La participación en redes permite un afianzamiento a nivel barrial, pero también la articulación con otras escalas, a nivel provincial y nacional e incluso internacional. La inserción en redes, como parte de su estrategia de acción en el territorio potencia el intercambio de recursos -tanto materiales como de información- y con ello, su posibilidad de intervención en el acceso al hábitat y su injerencia en otros ámbitos en vinculación con otros actores, desde el plano de política pública, por ejemplo (Ibidem).

ii) Irrupción de la pandemia, despliegue de estrategias de acción

Como se pudo observar, el accionar cotidiano de las organizaciones sociales del campo del hábitat se basa en una fuerte presencia en los territorios, esto les permite tener una vinculación estrecha con la población y un gran conocimiento de las necesidades locales. Este bagaje permite comprender la rápida velocidad de respuesta y la capacidad de acompañamiento que tuvieron una vez comenzada la pandemia. Esta, implicó un punto de inflexión para las estrategias de acción e intervención que despliegan habitualmente y la necesidad de reacomodarse en esta coyuntura. Ello pudo ser advertido con la información revelada pues el 90,5% han realizado iniciativas particulares en el contexto de pandemia. Esto

evidencia un común denominador entre las organizaciones que fue la flexibilidad que tuvieron para modificar sus líneas de acción y la necesidad de repensar estrategias para atender a las nuevas prioridades y nuevos desafíos que supuso la pandemia. A partir de los datos cuantitativos se puede afirmar que la mayoría de ellas ha diversificado su accionar incorporando iniciativas vinculadas al acceso a la alimentación y/o insumos de higiene y cuidados frente al COVID-19 o a la difusión de medidas sanitarias necesarias para procurar cuidado¹². En relación a la cantidad de población a las que están destinadas estas iniciativas se relevó que, la mayoría de las mismas (62,1%) se despliegan en general en una escala pequeña, siendo el 43,2% en un nivel barrial y un 18,9% municipal. Eso se vincula con el alcance en términos de cantidad de población, siendo que el 32% de las mismas alcanzó entre 101 y 500 personas. Seguido por un 22% entre 51 y 100. Otro dato significativo es que sólo un 19% de estas posee un alcance de más de 2000. Otro dato que arrojó el relevamiento acerca de la vinculación con el Estado en este escenario. Al respecto se puede señalar que la misma se dio principalmente a nivel local. Del total de las organizaciones que respondieron haber tenido alguna relación con el Estado, el 42,3% lo tuvo con el municipal, seguido de un 30% con el provincial y el nacional en un 26,9%. Esta vinculación entre Estado y organizaciones sociales se expresa claramente, dado que, del universo relevado por esta pregunta múltiple, sólo el 4,1% de las mismas refieren no tener ninguna relación. Asimismo, al momento de relevar el tipo de relación que entablan con el Estado, se destaca la participación en espacios de articulación multiactoral (29,1%), como foros, mesas de trabajo, consejos consultivos. Otra forma que asume la vinculación es a partir del otorgamiento de apoyo económico o materiales (25%), seguida de la participación en capacitaciones ofrecidas por organismos estatales (25%).

Con el inicio de la pandemia, y las restricciones impuestas, las carencias estructurales que poseen los hábitats populares se hicieron evidentes. Las deficiencias del suministro de agua, las condiciones de hacinamiento y de mal estado de las viviendas, la dificultad de ventilación de los espacios, generaban condiciones que aumentaban el riesgo de contagio del Covid19. Rápidamente el virus se empezó a expandir en los barrios populares -villas y asentamientos- y también en viviendas en condiciones marginales dentro de la ciudad

¹² El 36,84% refiere como ámbito principal de su iniciativa en pandemia la "Asistencia alimentaria", el 26,3% "Otro" (incluyen iniciativas vinculadas al hábitat y la vivienda), el 5,2% "Apoyo a personas en situación de calle", el 10% "Asistencia legal o laboral", 10% a "Cultura", 5% "Educación" y 5% "Acompañamiento psicológico".

consolidada, como hoteles, conventillos e inquilinatos. Las organizaciones sociales cumplieron un rol muy importante para trabajar con la población y visibilizar la situación en la que se encontraba. Como refirieron en la entrevista:

Fue un momento de mucha visibilización de la precariedad de los territorios [...] La gente empezó a cuestionar, por qué nos enfermamos. Porque vivimos mal, porque estamos rodeados de basurales, porque tenemos desagües cloacales inapropiados. Yo creo que el tema de salud, al estar atravesados por una enfermedad tan despiadada hizo que nos pusiéramos a pensar lo que implica la salud de manera integral y ahí entró el hábitat que muchas veces no se lo tenía contemplado (Laura¹³, referente de organización).

Esta tarea de visibilización y cuestionamiento crítico de las condiciones en que se habitaba dio cuenta de que la situación de aislamiento iba a ser insostenible a largo plazo. De hecho, el #QuedateEnCasa que se difundió ni bien fue sancionado el ASPO fue rápidamente puesto en jaque por las distintas realidades y contextos habitacionales y en menos de diez días, gracias a los reclamos de las organizaciones sociales y ante la agudización de la situación crítica en los barrios populares, se modificó el decreto del ASPO y se propuso el Programa #QuedateEnTuBarrio¹⁴, para estos sectores. Así también se generaron acciones para visibilizar la necesidad de intervenir de manera específica con las personas que se encuentran viviendo en la calle y ante esto también se difundió el reclamo que “Para quedarte en tu casa, primero hay que tener una” (Toscani, 2021).

Las organizaciones se propusieron un trabajo “puerta a puerta” para ver la situación sanitaria y habitacional de la población y para llegar a esa población donde el Estado no estaba llegando. El contacto con los territorios permitió rápidamente identificar las nuevas necesidades que se iban expresando a medida que avanzaba el ASPO. Las problemáticas de salud y de vivienda fueron acompañadas de otras problemáticas -algunas estructurales que se vieron profundizadas u otras generadas en esta coyuntura- lo que permite dar cuenta del carácter multidimensional que tuvieron los efectos de la pandemia. Entre las distintas problemáticas que se relevaron se pueden señalar la carencia de ingresos generada por la pérdida del empleo o la disminución de horas de trabajo. Esto impactó fuertemente en el

¹³ Los nombres son ficticios a fin de cumplir con el anonimato.

¹⁴ El Programa "Quedate en tu barrio" apuntó a garantizar la alimentación a la vez que se orienta a minimizar el movimiento de grandes cantidades de personas en busca de alimentos estableciendo así una cuarentena comunitaria en aquellos territorios donde la vida cotidiana se sostiene en función de los lazos solidarios, la organización popular y la articulación con los distintos niveles del Estado.

acceso a alimentos y también en aquellas personas inquilinas, especialmente, en la posibilidad de seguir sosteniendo el pago del alquiler. Como señalan las entrevistadas:

Otro problema eran los recursos que había en la familia, nadie tiene para aguantar una semana o dos semanas sin trabajar, sabíamos que el tema alimentario iba a ser una problemática seria (Laura, referente de organización social)

Hubo gente que se quedó sin trabajo, la gente no tenía con qué comer, los pibes no tenían con qué conectarse a la escuela. La brecha es muy grande, los pibes en las villas no están pudiendo estudiar (Mónica, referente de organización social)

La gente que accedía a un alquiler formal ahora ya no puede y tiene que acceder a una pieza, en un hotel, de última con baño privado. (Lorena, referente de organización social)

Incrementó mucho las personas en riesgo en situación de calle, inclusive con esto de entrega de morfi, la gente que venía a buscar vianda, había mucha en situación de calle, pero había mucha que estaba hotelada pero que se caminó un montón de cuadras para venir a buscar comida. Eso también lo notamos mucho, se nos empezó a equiparar la cantidad de gente que atendíamos, antes era solo situación de calle y algunos que ya estaban hotelados que por ahí ya se acomodaban, ya cobraban el subsidio, les hacía alguna changuita. Nosotros lo que vemos es que se deterioró un montón la calidad de vida de esas personas que están en riesgo a situación de calle, la changa no está, aflojó, el tema de la crisis económica que ya venía arrastrándose con la pandemia explotó. El que está hotelado, está hotelado pero no tiene ni para morfar, entonces en ese sentido estamos atendiendo, recibiendo mucha más gente que antes que estaba en riesgo a la situación de calle. Antes de la gente que venía casi el 80% estaba en situación de calle y ahora te diría que es mitad y mitad (Lorena, referente de organización social)

También se vio la dificultad para la continuidad educativa para niñxs y adolescentes por el acceso a internet y a dispositivos electrónicos, dando cuenta de una brecha digital persistente y generadora de desigualdad. Relacionado con esto, en un contexto de fuerte digitalización de las actividades, también se vio la dificultad para realizar los trámites necesarios para acceder a programas sociales, al permiso de circulación o incluso al turno de vacunación. Como señala la entrevistada,

Decíamos, que el aislamiento no sea abandono, no iban a la escuela, no iban al centro comunitario, no iban al espacio de fútbol, estaban en las casas y hay muchas violencias que surgen que no había donde denunciarlas, por eso nos parece importan sostener estos espacios. Lo mismo las situaciones de

violencia hacia las mujeres, que se agravaron. Campaña para difundir el buen trato, desde experiencias positivas, hicimos con escuelas y organizaciones y la difusión de la línea 102 que ayuda a las infancias porque era desconocida y la atención a situaciones de violencia en articulación con organizaciones, generando redes para que pudiera llegar a las casas (Claudia, referente de organización social).

A partir del análisis de las preguntas abiertas del cuestionario y de las entrevistas realizadas a referentes de organizaciones sociales se pueden identificar y caracterizar con mayor detalle las estrategias para enfrentar la pandemia desplegadas por las organizaciones en conjunto con las personas y familias que se encuentran en hábitats precarios. Estas incluyen diferentes acciones y en su conjunto permiten identificar un repertorio de acción específico que se apoya en la trayectoria territorial y las estrategias que poseen estas organizaciones del campo del hábitat. En este sentido, es posible detectar que -a grandes rasgos- desplegaron estrategias en cinco áreas de intervención:

Primeramente, observamos las acciones de **acceso a recursos para la alimentación**. La pérdida parcial o total del empleo implicó rápidamente una dificultad de disponer de recursos económicos para garantizar su alimentación. Aquí las acciones desplegadas por las organizaciones del campo de hábitat implicaron la organización de ollas populares, el pedido de donaciones, tanto de recursos monetarios, como de mercadería. Estas acciones llevaron, en ocasiones, a la articulación con comedores o merenderos barriales para entregarles los recursos obtenidos. Si bien en nuestro país hay una fuerte experiencia de ollas populares y comedores, como refieren en las entrevistas, estas acciones resultaron novedosas de realizar para las organizaciones del campo del hábitat. En palabras de las entrevistadas,

Acá cambió la modalidad, salimos a la calle a buscar la demanda, empezamos a entregar comida que para nosotros es un sobre esfuerzo porque somos una organización chica, no tenemos un circuito armado de donaciones o que bajen alimentos (Lorena, referente de organización social)

Era de las primeras veces que lo hacíamos, era una colecta, porque los comedores donde hemos trabajado y hemos mantenido el contacto, no tenían materia prima para desarrollar la comida. Entonces hemos desarrollado ahí el año pasado para esta época una colecta grande para que llegue mercadería a los distintos comedores donde hemos laburado o estamos laburando (Florencia, referente de organización social)

sabíamos que las infancias iban a ser las que enseguida sufrieran la falta de alimentos, así que organizamos con un conjunto de organizaciones la compra de alimentos y de recursos para la compra. Eso lo hicimos con las

organizaciones territoriales y también lo hicimos como organización. Armamos una campaña. Tratamos de destinar fondos que teníamos para la compra de bolsones, tratamos de comprar alimentos frescos que sean saludables, agroecológicos que suplieran lo que no tenían los comedores, que tienen más secos, para complementar con carnes, lácteos. (Laura, referente de organización social)

En segundo lugar, se detectaron acciones tendientes al **mejoramiento de los espacios comunitarios** porque el aumento de la demanda de alimentos en comedores y merenderos requirió de ampliaciones y del reacondicionamiento de dichos espacios para poder respetar las nuevas pautas de higiene y distanciamientos necesarias para evitar contagios. Como señala un entrevistado,

No había lugar de acopio para la mercadería que llegaba y no había posibilidad de cocinar en el espacio que había. Eso cambió por cuestiones propias de la necesidad. Fue un proyecto que se pensaba ampliar de acá a un tiempo y tuvo que hacerse en lo inmediato (Manuel, referente de organización social).

Asimismo, dado que sólo fueron identificados como esenciales comedores y merenderos, el aislamiento obligatorio implicó tener que cerrar el espacio físico de reunión de las organizaciones de hábitat. Ello llevó a la pérdida del contacto, del intercambio, del quehacer en conjunto. A su vez a un repensar de las condiciones en que dichos espacios se encuentran y a la necesidad de realizarles mejoras para el momento de poder reencontrarse nuevamente en el territorio. Sobre eso hace referencia una referente de organización social:

Lo peor que nos puede pasar es ¿dónde está el poder del sector popular? En el encuentro, en la juntada en el pensamiento colectivo, la búsqueda de respuestas colectivas. No poder encontrarnos eso ya es muy grave, entonces dijimos para poder seguir encontrándonos en espacios saludables, tenemos que mejorar los centros, entonces también una de las acciones fue buscar recursos para poder mejorar los centros comunitarios, mejorar los baños, acondicionar con aislación adecuada y mejorar los espacios públicos porque como ahora no se sabe cómo va a seguir la pandemia, solamente los espacios seguros van a ser los espacios abiertos (Mónica, referente de organización social)

Asimismo, las organizaciones que se dedicaban a cuestiones constructivas se abocaron al mejoramiento de las viviendas de lxs miembros de las organizaciones que así lo requirieron por alguna necesidad específica. Como señala la entrevistada:

Pudimos también atender situaciones críticas. Por ejemplo, arreglar dormitorios y baños para chicos que estaban en tratamiento y no podían estar internados por la situación de pandemia. (Claudia, referente de organización social)

En tercer lugar, detectamos las acciones que se vinculaban con el **asesoramiento legal**. En el marco de la pandemia, las consultas referidas a desalojos o algún problema de tenencia precaria de vivienda se intensificaron. Aquí el rol de las organizaciones sociales vinculadas principalmente al sector de inquilinxs, tanto en el mercado formal de alquileres como el informal, fue muy importante. Sus acciones se focalizaron en realizar una fuerte difusión de la información sobre el decreto 320/20 y su extensión 766/20 a partir del cual también acompañaron a personas en riesgo de desalojo para garantizar el cumplimiento del mismo y evitar que personas y grupos familiares se queden en la calle en este contexto. Dentro del mercado informal de piezas la posibilidad de frenar desalojos se hace aún más difícil por la falta de legalidad que se aplica en estos espacios, como refieren las entrevistadas:

Se sucedían desalojos día a día, las primeras intervenciones que acompañamos eran de mujeres embarazadas que estaban queriendo desalojar en hoteles (Mónica, referente de organización)

Cuando salió el 320 fuimos siguiendo muy de cerca cómo hacer para trabajar el desarme de ese decreto que digo, sirvió puntualmente para frenar los desalojos y congelar, pero no se vio que generó un montón de deuda sobre los hogares inquilinos. No se vieron herramientas para desendeudar esas familias en un momento de crisis económica cada vez más marcada y tomó la misma solución de siempre, que es brindar algún tipo de solución a través de la contracción de deuda (...) parece que la única forma que conoce el estado nacional, sea de este gobierno o del anterior, del anterior, es a través de la contracción de deuda de la familia. Entonces ahí intentamos trabajar bastante sobre sugerencias de políticas públicas que vayan en algún sentido a desendeudar a estas familias y sacarles presión económica a estas familias (Carla, referente de organización)

Otra acción desarrollada por las organizaciones se vinculó al **acompañamiento para el acceso a los programas estatales**. La histórica presencia en programas habitacionales mencionada anteriormente se observa a partir de los datos relevados. Esta vinculación o intercambio permanente con el Estado se fue visualizando a partir de las distintas medidas que se sancionaron, algunas de las cuales fueron recuperadas por la demanda de las organizaciones o bien, reformuladas a partir de las críticas o propuestas superadoras que se realizaban una vez que se implementaban. Como menciona una entrevistada,

Reunirnos con Arroyo [Ministro de Desarrollo Social], para contarle cómo veíamos el barrio. Ser unidad ejecutora en cuartel V [barrio de Moreno] y en Morón. Con dos ideas: apoyar a organizaciones que estaban generando huertas comunitarias para las ollas nuevas que habían surgido y para las familias y además por una cuestión de salud y de poder pasar este tiempo. Por otro lado, cómo mejorar los espacios donde habitamos, pudiendo empoderar a las mujeres en un proyecto de mujeres constructoras (Laura, referente de organización social).

Vinculado con la coyuntura y las distintas medidas y programas que se implementaron, se puede comprender este rol específico que asumieron las organizaciones sociales como articuladoras entre los programas sociales asesorando sobre los mismos y en ocasiones garantizando la llegada real a la población a quién estaban destinados. Eso se evidenció, por ejemplo, en la tramitación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)¹⁵ poniendo a disposición en ocasiones los celulares para que las personas puedan gestionarlo, o asesorando en cómo realizar el trámite virtual. Cuestión que resultó central en el contexto de pandemia, dando evidencia de la brecha digital existente. Esta cuestión es muy relevante de resaltar dado que en los hogares en situación de pobreza que se encuentran en condiciones habitacionales precarias, en donde poseen un menor acceso a las tecnologías de la información, se estima que las medidas han tenido mayores repercusiones sobre en su salud (Baretto, y Puntel, 2021). Teniendo esto en consideración el acompañamiento a través de los trámites virtuales para superar las dificultades que este sector tienen en relación al acceso a dispositivos digitales, resultó de suma importancia para garantizar el acceso a los programas que se estaban implementando. Como es señalada en la entrevista por una referente de organización social:

La falta de acceso a un dispositivo tecnológico o de conectividad, cualquier política pública de contingencia que ha salido desde el inicio de la pandemia no llegó a la población en situación de calle si no fue intermediada por una organización social. Si a esa persona no la acompañó una organización social para inscribirla al IFE para sacarle un permiso para circular esa persona no podía acceder a una política pública. Eso se notó que es un derecho más vulnerado el tema de la falta de tecnología, la falta de acceso a conectividad, eso se vio más que nunca (Lorena, referente de organización).

Laburamos un montón con la inscripción al IFE, capaz cuando te llegaba que lo podía cobrar había que salir a buscar a la persona porque no tenía celular (Mónica, referente de organización).

¹⁵ Se trató de una medida excepcional de transferencia monetaria que el Estado Nacional generó para sectores en situación de vulnerabilidad económica y cuya situación se vio agudizada en el contexto de pandemia.

Finalmente, se detectaron acciones de **incidencia en la política pública**. Parte de las prácticas realizadas por la incidencia en política fue la promoción de un protocolo específico de acción una vez detectado un caso positivo de Covid19 en los barrios populares. El reclamo y las acciones propositivas de las organizaciones sociales, llevó a la sanción por parte del gobierno nacional de un protocolo de acción frente al Covid19 en dichos barrios para que se garantice el reconocimiento de sus características específicas y, por lo tanto, la necesidad de generar intervenciones particulares que las contemplen. Este contexto también permitió visibilizar las formas habitacionales precarias presentes en los distintos barrios de la ciudad consolidada. En el caso de la CABA, por ejemplo, en julio del 2020 con el reclamo del Ministerio Público de la Defensa y organizaciones sociales se consiguió la sanción del “Protocolo de actuación ante sospecha y/o confirmación de Covid19 en vivienda o espacios multifamiliares con baño y/o cocina compartida en contexto de pandemia”, a través de la Disposición 54-2020, que reconoció las especificidades que poseen los hoteles, pensiones, conventillos e inquilinatos y la dificultad de estos lugares de establecer medidas mínimas de distanciamiento, cuando piezas, baños y cocinas son compartidas por el resto del grupo conviviente y con el resto de lxs vecinxs que alquilan piezas.

En las distintas acciones relevadas se puede observar que la estrategia frente a la pandemia desplegada por parte de las organizaciones se propuso abordar los distintos matices y problemas que se profundizaron o expresaron en el contexto de la pandemia de Covid19, así como también, las intervenciones que fueron necesarias realizar. Estas a su vez, pueden ser entendidas como soluciones innovadoras que dieron respuestas concretas para sortear este escenario tan particular (Gradin, et al 2021). Cabe señalar que si bien suponen un plano “novedoso” las mismas se valen de todo el conocimiento y repertorio previo que sin este no hubiesen podido acompañar en el territorio. El trabajo realizado por las organizaciones fue esencial para poder acompañar a la población en este contexto.

Reflexiones finales

La situación de pandemia y las medidas sociales y sanitarias impulsadas afectaron fuertemente a nuestro país, en algunos casos generando problemáticas nuevas, pero también agudizando y evidenciando cuestiones estructurales que van más allá de la coyuntura actual. La cuestión de la vivienda y el hábitat es un ejemplo de ello, sobre todo en un contexto en el

que la vivienda se tornó un lugar central donde se condensaron las distintas actividades cotidianas que comúnmente se realizaban por fuera en las calles o en otras instituciones: el trabajo, la educación, actividades recreativas, etc. Como se señaló, el #QuedateEnCasa no significó lo mismo para toda la población, la calidad de la vivienda marcó restricciones concretas que operaron profundizando la desigualdad entre los distintos sectores sociales. Por ello, fueron necesarias el trazado de políticas diferenciadas que, aunque sin resolver la cuestión de fondo, pudieron minimizar en parte estas problemáticas.

Como se pudo observar a partir de lo analizado, las organizaciones sociales del campo del hábitat han dado cuenta de su capacidad de movilización de recursos y de respuesta rápida a las necesidades identificadas en los territorios, profundizando sus acciones habituales y reconfigurando las mismas a partir de las necesidades que fueron surgiendo. Estas pudieron en el contexto de la pandemia darle impulso a diferentes tipos de acciones que resultaron clave y determinantes en la resolución de conflictos. Se pudo observar que “dejaron” en pausa algunas de sus tareas habituales para acompañar las urgencias alimentarias y sanitarias. Estas destinaron sus esfuerzos en la entrega de alimentos familia por familia, realizaron relevamientos de situaciones sociales yendo a los hogares, transmitieron información de manera clara, generaron protocolos y actividades de promoción de la salud, acompañaron a las familias para acondicionar las viviendas para que de manera rápida pudieran asistir en situaciones específicas (familias numerosas, niños pequeños, personas mayores, mujeres víctimas de violencia doméstica) o bien participaron en el acondicionamiento de espacios comunitarios y/o habitacionales.

Como es posible observar, las organizaciones analizadas – en términos generales- priorizaron y tomaron un rol protagónico en dar respuesta a las necesidades básicas que la pandemia y sus efectos generaron en las poblaciones más necesitadas. Fueron ellas quienes con su trayectoria previa, lograron de manera rápida y efectiva, cubrir la urgencia. Las organizaciones que traían agendas vinculadas a la restitución de derechos o tareas cercanas a las capacitaciones, debieron redefinirse para acompañar. En muchos casos, apelando a la diversificación de estrategias, al fortalecimiento de redes previas, a la constitución de nuevas y a la implementación de las tecnologías digitales como nuevas modalidades para acompañar de manera cercana en la distancia. Con la vuelta a la presencialidad, muchas de las acciones de tipo virtual continuaron siendo utilizadas para la organización general como así también para darle mayor alcance a las iniciativas.

De este modo, quedó demostrado que las organizaciones sociales, especialmente las de base territorial, constituyeron -y constituyen- un resorte esencial para hacer frente a las crisis socioeconómicas, colaborando en la producción y distribución de recursos básicos para asegurar el acceso a alimentación, y otros bienes y servicios esenciales (cuidado, apoyo escolar, distribución de medicamentos, material sanitario, acompañamiento a adultos mayores, etc.), como un componente central de la contención social. Asimismo, esta situación evidenció el rol significativo que poseen para visibilizar la situación en la que se encuentran algunos barrios populares como las deficiencias del suministro de agua, las condiciones de hacinamiento y de mal estado de las viviendas, la dificultad de ventilación de los espacios y la velocidad de contagio con que el coronavirus se expande principalmente en los barrios populares -villas y asentamientos- y también en barrios o viviendas en condiciones marginales dentro de la ciudad consolidada. Las estrategias de reclamo, denuncias y armado de propuestas características del repertorio de las organizaciones, se vieron reforzadas en este contexto ante la necesidad de pensar en lineamientos y medidas específicas para estos sectores.

En nuestro país, las organizaciones sociales vinculadas al hábitat son un actor social que se ha caracterizado históricamente por acompañar procesos populares en los territorios y en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades. La coyuntura actual fue un ejemplo más de su capacidad de movilización de recursos, de generación de propuestas de política pública y su importancia para comprender las necesidades específicas de la población y poder transformarlas en acciones concretas. Asimismo, esta coyuntura dio cuenta de la capacidad que tienen al intervenir en red, actuando en conjunto con otras organizaciones, incluso articulando los diferentes niveles jurisdiccionales a partir de federaciones y organizaciones internacionales. Aquellas organizaciones con más años de trayectoria pudieron incluso canalizar recursos estatales o de organismos internacionales para la población. En este contexto de tanta necesidad las organizaciones sociales que intervinieron en los territorios demostraron, una vez más lo esencial que es su trabajo. Este trabajo, que muchas veces es realizado de manera voluntaria o por muy bajos ingresos.

Por otra parte, se pudo evidenciar que, en esta coyuntura tan particular, la combinación y despliegue de distintas estrategias les ha permitido a los sectores más vulnerables sobrellevar la situación de pobreza en la que se encuentran. Específicamente, la estrategia de participación en organizaciones sociales sirvió también para poder acceder con

mayor facilidad a recursos y contención, pero también a las distintas políticas implementadas. En tal sentido, la participación en organizaciones sociales y las acciones desplegadas por estas últimas en el contexto de pandemia adquiere una relevancia significativa para acompañar y dar respuesta a las nuevas necesidades que surgieron en este contexto, así como también a los problemas estructurales que se agudizaron con la crisis. En este sentido, es posible identificar que las acciones basadas en la problemática alimentaria significaron una transformación en el repertorio tradicional de las organizaciones sociales y continúan siendo una tarea que recae en gran parte de ellas. Estas, a raíz de la crisis económica actual, resultan espacios claves para la provisión de alimentos, restando lugar a otro tipo de acciones vinculadas a cuestiones de ciudadanía o recuperación de derechos sociales.

Todas las cuestiones analizadas en este artículo dejan en evidencia la relevancia que tiene la articulación entre las organizaciones sociales y las distintas dependencias del Estado. En tal sentido, el involucramiento de las organizaciones, así como de los sectores sociales que representan, resulta clave para pensar a las futuras políticas públicas que se tracen para delimitar las líneas de acción necesarias para atravesar la post pandemia y las consecuencias sociales y económicas que esta ha agudizado. No solo en términos de ejecución, sino también en lo que respecta a la participación en la formulación y de evaluación de los efectos de dichas políticas tienen en los territorios concretos. Sin ello, las distancias generadas entre aquello plasmado por programas y políticas, con los efectos en los territorios concretos, se hace muy evidente y continuarán sin resolverse las urgentes cuestiones de fondo.

Bibliografía

- Argüello, O. (1981) "Estrategias de supervivencia: un concepto en busca de su contenido". *Demografía y economía*. 15. 2
- Barreto, M. y Puntel M. (2021) Habitar y trabajar en el hábitat popular. Impacto de la pandemia de la COVID-19 en el AMGR, Chaco, Argentina. *II Encuentro Red de Asentamientos Populares. Pandemia Crisis y oportunidades para el hábitat popular*. 17,18 y 19 de junio 2021. Resistencia. Chaco.
- Cuenya, B., Gazzoli, R. y Yujnovsky, O. (1979). Políticas de asentamientos humanos. Repercusiones del Hábitat en América Latina. Buenos Aires: Ediciones SIAP y Comisión de Desarrollo Urbano y Regional de CLACSO.

- Dabas, E. (1998) *Redes Sociales, familias y Escuela*. Colección Cuestiones de Educación. Buenos Aires: Editorial Paidós.
- Dabas, E. y Perrone, N. (1999). *Redes en salud*. *FUNCER*. Disponible en: http://www.iin.oas.org/Cursos_a_distancia/explotacion_sexual/Lectura19.Red.pdf
- Calabrese Tello, J.; Curtit, G. y Rovira, E. (2015). Políticas públicas de hábitat y organización comunitaria. *XXXIV Encuentro Arquisur y XIX Congreso de Escuelas y Facultades Públicas de Arquitectura de los países de América del Sur*, Facultad de Arquitectura y Urbanismo. La Plata, Argentina. Disponible en: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/50680>.
- Di Virgilio, M. (2012) Participación social y organizaciones sociales en la implementación de políticas orientadas a la producción social del hábitat en el área metropolitana de Buenos Aires, Argentina. *Revista SAAP* [online]. 2012, vol.6, n.1 Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-19702012000100001&lng=es&nrm=iso.
- Fournier, M. y Cascardo, F. (2022) “Deudas, cuidados y vulnerabilidad: el caso de las organizaciones comunitarias y los espacios asociativos de cuidado en la Argentina”. *Documentos de Proyectos* (LC/TS.2022/52, LC/BUE/TS.2022/4). Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Gradin, A., Toscani, M., Ferrarri Mango, C. y Muro, M. (2021) Experiencias de Inclusión Financiera en los territorios durante la pandemia. *Serie Experiencias en Acción N°1*. Territorios en Acción.
- Granero Realini, G., Barreda, M. y Bercovich, F. (2018) La política habitacional en Argentina. Una mirada a través de los institutos provinciales de vivienda. Documento de Trabajo N° 181. Mayo. *CIPPEC*. Programa de Ciudades Área de Desarrollo Económico. Disponible en: <https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2019/06/181-CDS-DT-La-pol%C3%ADtica-habitacional-en-Argentina-Granero-Bercovich-y-Barreda-junio-2016-1.pdf?fbclid=IwAR0Hk6oSQdijCcLtKQFvfm1h4UI9Jx4VAkbtwBZcRPH2-6ujnu0ImBaTIVU#:~:text=En%20este%20contexto%2C%20seg%C3%BAAn%20estimaciones,3%2C5%20millones%20de%20viviendas>.
- Grinberg, S. y Verón, E. (2022). COVID-19 y digitalización en contextos de pobreza urbana. *Bitácora Urbano Territorial*, 32(II): 89-100. <https://doi.org/10.15446/bitacora.v32n2.99794>

- Espinosa Ortiz, F., Vieyra, A. y Garibay Orozco, C. (2015) Narrativas sobre el lugar. Habitar una vivienda de interés social en la periferia urbana. *Revista Invi*. Vol. 30 (No 84) 59-86.
- Heidegger, M. (1951) Construir, habitar, pensar [Bauen, Wohnen, Denken]. *Conferencia pronunciada en el marco de la "segunda reunión de Darmstadt"*, publicada en *Vorträge und Aufsätze*, G. Neske, Pfullingen, 1954.
- Hintze, S. (2004) "Capital social y estrategias de supervivencia. Reflexiones sobre el `capital social de los pobres`". En Danani, C. (comp). *Políticas sociales y economía social: debates fundamentales*. Buenos Aires: UNGS-Fundación OSDE-Altamira, Colección de Lecturas sobre Economía Social.
- Motta, J. (2018) Procesos de mejoramiento del hábitat y la vivienda en Latinoamérica La participación como instrumento de producción de la ciudad. *Cuestión Urbana*, Año 2, Nro 3. Disponible en: http://cec.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/15/2018/07/06_Motta.pdf
- Najman, M. (2017) Survival Strategies The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies Palumbo, Joseph; Ma de la Paz Toscani; Rosa, Paula y Zahiry Martínez Araujo (2022). Políticas de hábitat, ¿En transición? Una mirada sobre dos políticas permeadas por la dimensión participativa. *Revista PENSUM*. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Arquitectura. Urbanismo y Diseño. Ciudad de Córdoba. Volumen 8, junio. Pp. 39-54.
- Pizzorno, A. (1976) "Introducción al estudio de la Participación Política". *SIAP*. Planteos. Buenos Aires. Ponencia para el Segundo Congreso de ISTR.
- Pradilla, E. (1983). *El problema de la vivienda en América Latina*. Quito: Centro de Investigaciones CIUDAD.
- Ratto, C., y Azerrat, J., (2021). La misma pandemia, distintas estrategias. Aproximaciones desde la experiencia de los países del Cono Sur de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. En Gutiérrez Cham, G., Herrera Lima, S. Herrera Lima, & Kemner, J., *Pandemia y crisis: el COVID-19 en América Latina* (pp. 118-152). Universidad de Guadalajara.
- Rosa, P. (2015). Espacios para la transformación: Hábitat y economía Social y Solidaria. En García, A., [et.al.] *Espacio y poder en las políticas de desarrollo del Siglo XXI*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires). ISBN 978-987-33-6520-1

- Rosa, P., García, A. y Motta, J., (2013). Políticas públicas y microcréditos para mejoramiento de viviendas. La Asociación Civil Madre Tierra en el AMBA (1995-2012). *VII Jornadas de Investigadores en Economías Regionales*. Organizadas por CEUR/CONICET y UNNE. 12 y 13 de septiembre, Resistencia, Chaco.
- Romero, G., (1995). La producción social del hábitat: reflexiones sobre su historia, concepciones y propuestas. *Habitat International Coalition*.
- Rosenfeld, M., (2005) “Dilemas de la participación social: El encuentro entre las Políticas Públicas y la sociedad Civil”. *Cuadernos de Observatorio Social*, Número 7 – Septiembre.
- Toscani, M., (2021). Hábitat y vivienda. Rol de las organizaciones sociales en tiempos de pandemia. *Experiencias en Acción N°4*. Territorios en Acción.
- Toscani, M. y Rosa, P., (2022). Organizaciones sociales del hábitat. Serie Acciones en Tiempos de pandemia. *Territorios en Acción*. Flacso- Argentina. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. ISBN 978-950-9379-95-4.
- Turner, J. (1977). Vivienda, todo el poder para los usuarios. Hacia la economía en la construcción del entorno. Madrid: H. Blume Ediciones.
- Turner, J.. y Fichter, R., (Ed.) (1976). *Libertad para construir. El proceso habitacional controlado por el usuario*. México D.F.: Siglo XXI Editores.

Fuentes consultadas

Sitio web de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (2013)

<http://www.vivienda.gob.ar/>

Sitio web de Iniciativa: Territorios en Acción

<http://xn--territoriosenaccion-61b.org/>